

Imprimir

Denuncias a porrillo ha habido en las que ha salido a flote un catálogo inverosímil de conductas propias de una corrupción generalizada; las mismas que prosperan en el mundillo de la política y en el sistema de la justicia, lo que ya es increíble.

Sobornos, trampas y revelaciones

La contratación pública se ha revelado como el reino del soborno y del favoritismo en las adjudicaciones de obras o de servicios; todo una trama de pagos y favores indebidos en los que participa el empresario privado, aquel que va a ser beneficiado con la licitación tramposa; y, de otro lado, el funcionario que vende clandestinamente sus componendas. Y, en medio, tejiendo perversamente la red, ha aparecido la figura del político codicioso y desvergonzado, el mismo que urde, por jugosas “comisiones”, la mediación entre *“el que paga y el que peca”*.

Las confesiones, primero de Otto Bula- el recadero de los pagos, el transportador de los maletines repletos de dólares-; y luego las de Gabriel Dumar- socio y calanchín empresarial de políticos regionales- parecen confirmar la participación de un congresista como Ñoño Elías en los juegos sucios con los que se aceitaba la maquinaria de las licitaciones en las obras públicas; juegos de los que podría haber derivado ganancias por un monto escandaloso de 12 o 13 mil millones de pesos, provenientes de la empresa brasilera Odebrecht, la multinacional de la *“untada”*, la que llena las manos asqueantes de algunos funcionarios, altos y medios.

En la esfera de la justicia, las grabaciones hechas por agencias de inteligencia en Estados Unidos a algunos abogados, en las que esperaban detectar los rastros del lavado de activos, mostraron indicios en los comportamientos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que conducirían a descubrir sobornos, para *“torcer”* fallos y sentencias, en favor sobre todo de políticos poderosos; a su vez, probablemente aliados de jefes paramilitares; o que tal vez participaron en las tramas de la corrupción dentro de la contratación pública.

Así, anteriores decisiones judiciales u omisiones de los tribunales en beneficio de políticos profesionales como Ñoño Elías y Mussa Besayle, señalarían posibles intervenciones tramposas, sutiles o no, de parte de algunos altos magistrados, a cambio de apetitosas bolsas de dinero; por lo que no es extraño que haya llegado a hablarse de “vacas” o colectas entre amigotes solventes para reunir 3 mil o 4 mil millones de pesos, a fin de materializar un soborno en la justicia; todo ello para conseguir un fallo favorable.

Crimen en la sociedad, negocio dentro de lo público

Con estas revelaciones, han emergido la extravagancia y la extensión de la podredumbre, lo opuesto completamente a lo que los pensadores clásicos, desde Cicerón hasta Maquiavelo, llamaron la *virtud republicana*, esa que proporciona el *sentido* que le da vida a un orden político, para que este no sea una simple constelación de bandas dedicadas al saqueo de la riqueza colectiva.

Con la corrupción en la política y en la justicia, la *virtud*, en tanto núcleo de una válida “*hegemonía*” cultural y espiritual, es reemplazada por la república del vicio y del delito.

El régimen deja descomponer sus cimientos éticos, esos que reproducen continuamente los imaginarios que alimentan el *ideal* de lo *público*, como esfera que le da sentido a lo privado, a los negocios y a las necesidades, en la sociedad civil.

La epidemia de corrupción invierte ese *ideal*, a la vez que lo descompone por entero. Es el *negocio*, el que gobierna la marcha del régimen. En ese sentido, el *bien público*, (la justicia por ejemplo, o la representación parlamentaria), se disuelve en la ganancia particular y en la ilegalidad.

El "*bien público*" (o la "*cosa de todos*") es devorado por el negocio; mientras tanto, este último es consumido por el crimen. Los negocios en la sociedad son atrapados, en buena parte, por las lógicas criminales, algo que se transparenta en múltiples actividades ilícitas, fuente de los recursos con los que se dan las transacciones que pervierten las reglas legítimas. A su turno, el crimen organizado induce los "*cruces*" y "*torcidos*" dentro de las instituciones; las cuales son invadidas por intercambios y comercios bajo el imperio de una lógica privada, dominante en el ofrecimiento de los bienes públicos por el Estado.

El crimen que absorbe el negocio y el negocio que atrapa lo público, he allí el conjunto de eslabones de una cadena que daña esencialmente al Estado. Algo muy grave, que exige remedios de fondo.

RICARDO GARCÍA DUARTE: Ex rector Universidad Distrital